

No. 35930

Multilateral

Central American Convention for the prevention and repression of money laundering crimes related to the illicit traffic of narcotic drugs and related crimes. Panama, 11 July 1997

Entry into force: *5 July 1999, in accordance with article 21 (see following page)*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Central American Integration System, 30 July 1999*

Multilatéral

Convention centraméricaine en vue de la prévention et de la répression des crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de stupéfiants et de crimes connexes. Panama, 11 juillet 1997

Entrée en vigueur : *5 juillet 1999, conformément à l'article 21 (voir la page suivante)*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Système d'intégration centre-américain, 30 juillet 1999*

Participant	Ratification
El Salvador	12 Feb 1998
Nicaragua	5 Jul 1999
Panama	2 Oct 1998

Participant	Ratification
El Salvador	12 févr 1998
Nicaragua	5 juil 1999
Panama	2 oct 1998

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**CONVENIO CENTROAMERICANO PARA LA PREVENCION Y LA
REPRESION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE DINERO Y
DE ACTIVOS, RELACIONADOS CON EL TRAFICO ILICITO
DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS**

Las Repùblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá, en adelante "las Partes",

CONSIDERANDO:

Que los delitos de lavado de dinero y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, constituyen un serio disvalor social que merece ser prevenido y reprimido;

Que el proceso de los delitos de lavado de dinero y activos, producto de la actividad delictiva, conduce siempre a una descomposición de las estructuras sociales, políticas y económicas;

Que el dinero proveniente de esas actividades genera distorsión y competencia desleal para las economías legítimas de los países centroamericanos;

Que el fin último de esas actividades delictivas es consolidar sus ganancias mediante el empleo de mecanismos tendientes a la legitimación de capitales;

Las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, vigente desde el 11 de noviembre de 1990; el mandato contenido en el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Modelo de Legislación sobre el Blanqueo de Dinero y el Decomiso en Materia de Drogas del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de noviembre de 1995;

Los principios y propósitos establecidos en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, suscrito el 15 de diciembre de 1995;

Los propósitos para los cuales fue creada la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP), como un órgano especializado dentro de la estructura del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA);

Igualmente, la Declaración Final del Segundo Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL), reunidos en la ciudad de Panamá, los días 11 y 12 de abril de 1996, que propicia la aprobación de los instrumentos legales pertinentes de esta materia;

El compromiso asumido por los Gobiernos de los países centroamericanos, contenido en las declaraciones conjuntas de las Reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno de México y Centroamérica, en Tuxtla Gutiérrez I y II, celebradas, la primera en México el 11 y 12 de enero de 1991 y la segunda, en Costa Rica, los días 15 y 16 de febrero de 1996;

Las iniciativas conjuntas del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (OEA-CICAD), de la Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícitos de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP), y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), que condujeron a la creación del Centro Regional para el Desarrollo y la Cooperación Jurídica en América Central (CEDEJU), en materia de control de la producción y tráfico de drogas;

Que uno de los objetivos principales de CEDEJU es fomentar la armonización de las legislaciones de los países centroamericanos con la "Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", y el Modelo de Legislación promovidos por el PNUFID; y

La importancia de tener como marco de referencia el Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos.

POR TANTO:

Deciden suscribir el presente Convenio.

**CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1
Conceptos Generales**

Para efectos del presente Convenio, se entenderá por:

- 1) **Bienes:** Activos de cualquier tipo, corporales o incorporables, muebles o raíces, tangibles o intangibles, susceptibles de propiedad y valoración económica, así como documentos e instrumentos legales que acrediten la propiedad, y otros derechos sobre dichos activos.
- 2) **Convención:** Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, que entró en vigor el 11 de noviembre de 1990.
- 3) **Decomiso:** Pérdida definitiva de bienes, instrumentos y efectos, que provengan de la comisión de un delito, por

decisión de autoridad judicial competente, conforme al Artículo 1, letra l, de la Convención.

- 4) Embargo preventivo: Prohibición temporal de transferir, transformar, convertir, enajenar, gravar o mover bienes; custodia o control temporal de bienes en virtud de mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente, para asegurar la indemnización o reparación civil causada por el delito.
- 5) Instrumentos: Cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que existe intención de utilizar, de cualquier manera, para la comisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
- 6) Persona: Entes naturales o jurídicos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. Para los efectos de este Convenio, ambas tendrán responsabilidad y serán objeto de sanción.
- 7) Productos: Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
- 8) Tráfico ilícito: Delitos énumbrados en los párrafos 1 y 2 del Artículo 3 de la Convención.
- 9) Entidades de intermediación financiera autorizadas por la legislación interna de cada Estado Parte:
 - a) Bancos comerciales y financieras, compañías fiduciarias, compañías de seguros y reaseguros, asociaciones de ahorro y crédito, asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, cooperativas de crédito y otras instituciones o establecimientos de ahorro, crédito o débito.
 - b) Casas de corretaje o de intermediación para negociar valores.
 - c) Casas de intermediación para la venta de divisas o casas de cambio.
 - d) Otra de naturaleza similar.

Artículo 2
Delitos de Lavado y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, las siguientes conductas:

- 1) Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que proceden, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de uno de estos delitos.

2) Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o derechos relativos a ellos, previo conocimiento de que proceden directa o indirectamente del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos.

3) Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos o de la participación en uno de esos delitos.

Las sanciones correspondientes a cada delito serán fijadas por cada Estado Parte de conformidad a su legislación interna y tomando en consideración las establecidas por los demás Estados Parte.

De igual manera, se establecerán penas agravadas cuando tales delitos sean cometidos por funcionarios y empleados públicos.

**Artículo 3
Competencia**

La autoridad o el tribunal competente, de conformidad al derecho interno de cada Estado investigará, enjuiciará, fallará o sentenciará los delitos a los que se refiere el Artículo 2 de este Convenio, independientemente de que el delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos se hayan cometido en otra jurisdicción territorial, sin perjuicio de la extradición conforme a la legislación interna de cada Estado Parte.

**CAPITULO II
BIENES, PRODUCTOS E INSTRUMENTOS**

**Artículo 4
Medidas Cautelares sobre los Bienes, Productos o Instrumentos**

De acuerdo con el derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad competente dictará, en cualquier momento, las medidas cautelares encaminadas a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes de los delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

**Artículo 5
Decomiso de Bienes o Instrumentos**

Cuando una persona sea condenada por el delito de lavado de dinero, relacionado con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, el tribunal ordenará que los bienes, productos o instrumentos relacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

**Articulo 6
Terceros de Buena Fe**

Las medidas y sanciones a que se refieren los artículos 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, se efectuará la debida notificación a fin de que se presenten a hacer valer sus derechos quienes puedan alegar interés legitimo sobre los bienes, productos o instrumentos. El ordenamiento jurídico de cada uno de los Estados Parte considerará la forma más expedita y eficaz de notificación, según se trate de bienes registrables o no registrables.

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad competente dispondrá devolver, al reclamante, los bienes, productos o instrumentos cuando se haya acreditado y concluido que:

- 1) El reclamante tiene legitimo derecho respecto de los bienes, productos o instrumentos; y
Al reclamante no puede imputársele ningún tipo de participación, colusión o implicancia con respecto a delitos de lavado provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, objeto del proceso; y
- 2) El reclamante hizo todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos.

**Articulo 7
Destino de Bienes, Productos o Instrumentos
Sujetos a Medidas Cautelares**

Si su derecho interno así lo permitiera, cada Estado Parte podrá:

- 1) Autorizar a las autoridades encargadas de prevenir, controlar, tratar y reprimir los delitos a que se refiere el presente Convenio, el uso de los bienes, productos o instrumentos salvaguardando la obligación estatal de garantizar la preservación debida de los mismos.
Los Estados Parte tomarán las medidas pertinentes para que se sufraguen los gastos de uso y mantenimiento de lo embargado preventivamente.
- 2) Otorgar, cuando las circunstancias lo ameriten, la autorización establecida en el inciso anterior a un tercero de buena fe, o al propietario debidamente acreditado del bien, producto o instrumento sujeto a embargo preventivo.

**Articulo 8
Destino de Bienes, Productos o Instrumentos Decomisados**

Cuando, conforme al Artículo 5 de este Convenio, se decomisen bienes, productos o instrumentos que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, la autoridad competente podrá enajenarlos, destinárlos al uso oficial o transferirlos a las

entidades públicas correspondientes, según el derecho interno de cada Estado Parte.

**Artículo 9
Bienes, Productos o Instrumentos de Delitos
Cometidos en el Extranjero**

Conforme al derecho interno de cada Estado Parte, el tribunal o la autoridad competente podrá ordenar el embargo o cualquier medida cautelar relativos a los bienes, productos o instrumentos situados en su jurisdicción territorial, aplicables a delitos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, cometidos contra las leyes de otro país, cuando dichos delitos, de haberse cometido en su jurisdicción también fuesen considerados como tales.

**CAPITULO III
Entidades de Intermediación Financiera y Actividades Financieras**

**Artículo 10
Instituciones y Actividades Financieras**

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, serán objeto de control por las autoridades competentes de los Estados Parte. Asimismo, las personas que realicen las siguientes actividades:

- a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques;
- b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o rescate de cheques de viajero o giro postal;
- c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio; y
- d) Otras actividades que impliquen intermediación financiera, así como la emisión, operación o fiscalización de instrumentos o títulos de crédito.

**Artículo 11
Identificación de Clientes y Mandamiento de Registros**

En los Estados Parte con cuentas cifradas, anónimas u otras que operen bajo representación, civil o mercantil, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a las que se refiere el Artículo precedente, estarán obligadas a conocer la verdadera identidad de sus propietarios, para que puedan suministrárla a las autoridades encargadas del control, en las investigaciones sobre la materia regulada por este Convenio.

Esas entidades deberán registrar y verificar, por medios fehacientes, identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social de las personas, sean clientes

ocasionales o habituales, mediante documentos de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, carnets de conducir, contratos sociales y estatutos o cualesquiera otros documentos oficiales o privados, cuando establezcan relaciones comerciales, en especial, la apertura de cuentas nuevas, el otorgamiento de libretas de depósito, las transacciones fiduciarias, el arriendo de cajas de seguridad o las transacciones en efectivo que superen un determinado monto de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente en cada Estado Parte.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, antes referidas, deberán adoptar medidas razonables para obtener y conservar información acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se realice una transacción, cuando exista duda de que tales clientes puedan no estar actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el Estado donde tengan su sede o domicilio.

Durante la vigencia de una operación, y por lo menos cinco años a partir del fin de la transacción, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo precedente, deberán mantener registros de la información y documentación requeridas en este Artículo. Asimismo, deberán conservar los registros de la identidad de sus clientes, estados de cuenta y correspondencia comercial según lo determine la autoridad competente, por lo menos durante cinco años después del cierre de la cuenta.

Además, estas entidades deberán mantener registros que permitan reconstruir transacciones financieras que superen determinado monto de conformidad con lo dispuesto por la autoridad competente, en cada Estado Parte al menos cinco años después de concluida la transacción.

**Artículo 12
Disponibilidad de Registros**

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, deberán cumplir, pronto y dentro del plazo que se determine, las solicitudes de información que les dirijan las autoridades competentes respecto de la información y documentación citadas en el Artículo anterior. Estos datos serán utilizados en investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según corresponda, relacionados con delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, o con violaciones de lo dispuesto en este Convenio.

Las autoridades competentes de un Estado podrán compartir información con las autoridades competentes de otros Estados, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

**Artículo 13
Registro y Notificación de Transacciones en Efectivo**

Las instituciones financieras y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio,

deberán registrar, en un formulario diseñado por la autoridad competente de cada Estado Parte, cada transacción en efectivo en moneda nacional o extranjera que supere el monto determinado de conformidad con lo dispuesto por aquella. Acerca de cada transacción los formularios deberán contener, por lo menos, los siguientes datos:

- a) La identidad, firma y dirección de la persona que físicamente realiza la transacción;
- b) La identidad y dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción;
- c) La identidad y dirección del beneficiario o destinatario de la transacción, si la hubiere;
- d) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existen;
- e) El tipo de transacción de que se trate, tales como depósitos, retiro de fondos, cambio de monedas, cobro de cheques, compra de cheques certificados o cheques de cajero, órdenes de pago u otros pagos de transferencias efectuadas por la institución financiera o mediante ella;
- f) La identidad de la institución financiera donde se realizó la transacción;
- g) La fecha, hora y monto de la transacción;

Ese registro será llevado, en forma precisa y completa, por la institución financiera el día en que se realice la transacción y, a partir de esa fecha, se conservará durante el término de cinco años.

Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, que en conjunto superen determinado monto, serán consideradas una transacción única si son realizadas por determinada persona o en su beneficio, durante un día o en cualquier otro plazo que fije la autoridad competente. Cuando la institución financiera, sus empleados, funcionarios o agentes conozcan estas transacciones, deberán efectuar el registro en el formulario que determine la autoridad competente de cada Estado Parte.

En las transacciones realizadas por cuenta propia entre las entidades de intermediación financiera definidas en el inciso a), del Artículo 10 y supervisadas por las autoridades bancarias o financieras nacionales, no se requerirá el registro en el formulario aludido en este Artículo.

Los registros deberán estar a disposición del tribunal o la autoridad competente, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, para emplearlos en investigaciones y procesos criminales, civiles o administrativos, según corresponda, con respecto a delitos de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, o a la violación de este Convenio.

Cuando lo estime oportuno, la autoridad competente podrá establecer que las entidades de intermediación financiera y las que

realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio le presenten, dentro del plazo que ella fije, el formulario mencionado en este Artículo. Este documento servirá como prueba o informe oficial y se utilizará para los fines señalados en el párrafo anterior.

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, referidas en el párrafo precedente, no podrán poner en conocimiento de ninguna persona, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, que la información ha sido solicitada o proporcionada al tribunal o a la autoridad competente de cada Estado Parte.

**Artículo 14
Comunicación de Transacciones Financieras Sospechosas**

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio, prestarán atención especial a las transacciones, efectuadas o pretendidas en cualquier forma sospechosa, a los patrones de transacción no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, sin fundamento económico o legal evidente.

Esas entidades deberán comunicar, de inmediato, a las autoridades competentes la sospecha de que las transacciones puedan constituir actividades ilícitas o estar relacionadas con ellas.

Estas entidades no podrán poner en conocimiento de persona alguna, salvo un tribunal, autoridad competente u otra persona autorizada por las disposiciones legales internas de cada Estado Parte, el hecho de que ha solicitado o proporcionado la información al tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte.

Cuando la comunicación mencionada en el párrafo segundo de este Artículo se efectúe conforme a derecho, las entidades de intermediación financiera y sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados por la legislación, estarán exentos de responsabilidad penal, civil o administrativa, según corresponda, por el cumplimiento de este Artículo o por la revelación de información restringida por contrato o emanada de cualquier otra disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, cualquiera que sea el resultado de la comunicación.

**Artículo 15
Responsabilidades de las Entidades de Intermediación Financiera y de las que realicen Actividades Financieras**

Las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales, participen en delitos de lavado, tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, estarán sujetos a sanciones más graves que las aplicables a particulares ajenos a estas entidades.

Estas entidades serán responsables, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, por los actos de su personal, funcionarios, directores, propietarios u otros representantes autorizados que, actuando como tales, participen en la comisión de un delito previsto en el Artículo 2 de este Convenio.

Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pueda corresponderles a las personas indicadas en el párrafo anterior en relación con los delitos de lavado de dinero provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, las entidades a que se refiere el Artículo 10 antes referido, serán responsables de acuerdo con el derecho interno de cada país, por el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Convenio.

Artículo 16
Programas de Cumplimiento Obligatorio por Parte de las Entidades de Intermediación Financiera y de las que realicen Actividades Financieras

Para protegerse y detectar los delitos previstos en el Artículo 2 de este Convenio las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 de este Convenio, deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos.

Esos programas incluirán, como mínimo:

- a) Procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y un sistema para evaluar sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales.
- b) Capacitación permanente al personal, e instrucción en cuanto a las responsabilidades señaladas en los Artículos del 10 al 13 de este Convenio.
- c) El mecanismo de auditoría independiente para verificar el cumplimiento de los programas.

Asimismo, las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, antes referidas, deberán designar funcionarios gerenciales encargados de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. Estos funcionarios servirán de enlace con las autoridades competentes.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES RECTORAS DE APLICACION DEL CONVENIO

Artículo 17
Obligaciones de las Autoridades Competentes

De acuerdo con el derecho interno de cada Estado Parte, las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, entre otras obligaciones, deberán:

- a) Otorgar, denegar, suspender o cancelar licencias o permisos

- para operar entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio.
- b) Examinar, controlar o fiscalizar las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, relacionadas en el Artículo 10 de este Convenio y reglamentar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de registro y notificación establecidas en el presente Convenio.
 - c) Verificar, mediante exámenes regulares, que las entidades de intermediación financiera y las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 antes referido, posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio, a que se refiere el Artículo 15 de este Convenio.
 - d) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de entidades de intermediación financiera y de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 anteriormente mencionado, conforme a este Convenio, incluso las surgidas de un examen de cualquiera de ellas.
 - e) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las entidades de intermediación financiera y a las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 antes mencionado, a detectar patrones sospechosos en la conducta de sus clientes. Estas pautas se desarrollarán tomando en cuenta técnicas modernas y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo para el personal de estas entidades.
 - f) Cooperar con las autoridades competentes y aportarles, en la medida de lo posible, asistencia técnica, en el marco de investigaciones y procesos referentes a los delitos contenidos en el Artículo 2 de este Convenio y con los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades para reglamentar y supervisar las entidades de intermediación financiera, conforme al derecho interno de cada Estado Parte, deberán poner en conocimiento con prontitud, de las otras autoridades competentes cualquier información, recibida de entidades de intermediación financiera, relativa a transacciones o actividades sospechosas que puedan relacionarse con los delitos estipulados en el Artículo 2 de este Convenio y los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Las autoridades competentes y, en especial, las dotadas de potestades de reglamentación y supervisión sobre las entidades de intermediación financiera, conforme al derecho de cada Estado Parte, deberán prestar estrecha cooperación a las autoridades competentes de otros Estados en investigaciones, procesos y actuaciones relacionados con los delitos citados en el Artículo 2 de este Convenio, los demás delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y con las infracciones de las leyes o reglamentos administrativos aplicables a las entidades de intermediación financiera.

**Artículo 18
Cooperación Internacional**

Existirá cooperación entre los tribunales o las autoridades competentes de los Estados Parte, tomando las medidas apropiadas, a fin de prestarse asistencia en materia relacionada con delitos de lavado de dinero, proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, conforme a este Convenio y dentro de los límites de sus respectivos ordenamientos jurídicos.

El tribunal o autoridad competente de cada Estado Parte podrá, por la vía diplomática presentar o recibir una solicitud de su homólogo de otro Estado Parte para identificar, detectar, embargar o decomisar bienes, productos o instrumentos relacionados con delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, y podrá tomar las medidas apropiadas, incluso lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de este Convenio.

Una resolución judicial o sentencia firme que condene al decomiso de bienes, productos o instrumentos, expedida por un tribunal competente de otro Estado Parte respecto al lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, podrá admitirse como prueba de que estos bienes, productos o instrumentos pueden estar sujetos a embargo, a medidas cautelares, o a decomiso según corresponda, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

El tribunal o autoridad competente podrá recibir por la vía diplomática una solicitud de un tribunal o autoridad competente de otro Estado Parte para prestar asistencia, sobre una investigación o proceso de carácter civil, penal o administrativo, según corresponda, referente a delitos de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, o a violaciones de este Convenio.

Esta asistencia podrá incluir el suministro de originales o copias autenticadas de los documentos y registros pertinentes, comprendidos los de entidades de intermediación financiera, los de las que realicen actividades financieras, a que se refiere el Artículo 10 del presente Convenio y entidades gubernamentales; la obtención de testimonios en el Estado Parte requerido; la facilitación de la presencia o disponibilidad voluntaria en el Estado Parte requirente de personas para prestar declaración, incluso las detenidas; la localización o identificación de personas; la entrega de citaciones; el examen de objetos y lugares; la realización de inspecciones e incautaciones; la facilitación de información y elementos de pruebas y medidas cautelares.

La asistencia que se brinde para este Artículo se prestará conforme al derecho interno de cada Estado Parte y los instrumentos internacionales vigentes.

**Artículo 19
Secreto o Reserva Bancaria**

Las disposiciones legales referentes al secreto o la reserva bancaria no serán un impedimento para cumplir el presente Convenio, cuando la información sea solicitada o compartida por un tribunal o autoridad competente, conforme al derecho interno de cada Estado Parte.

**CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES**

Articulo 20

En toda controversia sobre la aplicación o interpretación del presente Convenio se utilizarán los medios de solución pacífica de controversias, y en su caso, serán sometidas al conocimiento de la Corte Centroamericana de Justicia.

Articulo 21

El presente Convenio será aprobado o ratificado por cada Estado Parte, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

La Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, será depositaria de los instrumentos de ratificación y adhesión del presente instrumento.

El presente Convenio tendrá duración indefinida y entrará en vigencia para los Estados que lo hayan ratificado, una vez que se haya depositado el tercer instrumento de ratificación, y a la fecha de depósito de sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión para los demás Estados.

Articulo 22

El presente Convenio queda abierto a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un acuerdo de asociación o vinculación.

Articulo 23

Este Convenio podrá modificarse por acuerdo entre las Partes, en virtud de protocolos de enmienda, los cuales entrarán en vigor en la misma forma prevista para el presente Convenio.

Articulo 24

En cualquier momento, cada Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio, mediante notificación escrita dirigida a la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. La denuncia recibida será notificada a todos los Estados Parte.

Para la Parte interesada, la denuncia surtirá efecto un año después de la fecha, en que la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana haya recibido la notificación del Estado denunciante.

Articulo 25

El presente Convenio no admite reservas.

Articulo 26

El original del presente Convenio será depositado en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, quien proporcionará copias certificadas a los Estados signatarios.

Articulo 27

El presente Convenio será registrado en la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 102 de la Carta de dicha Organización y en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

En fe de lo cual se firma el presente Convenio en la ciudad de Panamá, a los 11 días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.

POR LA REPUBLICA DE COSTA RICA

POR LA REPUBLICA DE EL SALVADOR


FERNANDO E. NARANJO
Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto


RAMON P. GONZALEZ GINER
Ministro de Relaciones
Exteriores

POR LA REPUBLICA GUATEMALA

POR LA REPUBLICA DE HONDURAS


EDUARDO STEIN BARILLAS
Ministro de Relaciones
Exteriores


J. DEMETRIO URBIZO
Secretario de Relaciones
Exteriores

POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA

POR LA REPUBLICA DE PANAMA


EMILIO ALVAREZ MONTALVAN
Ministro de Relaciones
Exteriores


RICARDO ALBERTO ARIAS ARIAS
Ministro de Relaciones
Exteriores

[TRANSLATION — TRADUCTION]

CENTRAL AMERICAN CONVENTION FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF THE OFFENCES OF MONEY LAUNDERING AND LAUNDERING OF ASSETS CONNECTED TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING AND RELATED OFFENCES

The Republics of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama, hereinafter referred to as "the Parties",

Considering

That the offences of money laundering and laundering of assets connected to illicit drug trafficking and related offences are a serious social scourge that should be prevented and suppressed;

That the perpetration of the offences of money laundering and laundering of assets derived from criminal activity invariably leads to a breakdown of social, political and economic structures;

That the proceeds of such activities generate distortions and unfair competition for the legitimate economies of the Central American countries;

That the ultimate aim of such criminal activities is to consolidate the profits derived therefrom through the use of mechanisms for legitimizing assets;

The provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, signed in Vienna, Austria, on 20 December 1988 and in force since 11 November 1990; the mandate contained in the Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences, adopted by the General Assembly of the Organization of American States (OAS); and the Model Law on Money Laundering, Confiscation and International Cooperation in Relation to Drugs, issued by the United Nations International Drug Control Programme (UNIDCP) in November 1995;

The principles and purposes laid down in the Framework Treaty on Democratic Security in Central America, signed on 15 December 1995;

The purposes for which the Permanent Central American Commission for the Eradication of the Illicit Production, Traffic, Consumption and Use of Drugs and Psychotropic Substances was established as a specialized body within the structure of the Central American Integration System (SICA);

Likewise, the Final Declaration of the second meeting of the Forum of Presidents of the Legislatures of Central America (FOPREL), held in Panamá City on 11 and 12 April 1996, which paves the way for the adoption of the relevant legal instruments in this area;

The commitment undertaken by the Governments of the Central American countries, contained in the joint declarations of the Meetings of Heads of State and Government of Mexico and Central America and of the Tuxtla Gutiérrez I and II meetings, held, respectively, in Mexico on 11 and 12 January 1991 and in Costa Rica on 15 and 16 February 1996;

The joint initiatives of the United Nations International Drug Control Programme (UNDCP), the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD) of the Organization of American States (OAS), the Permanent Central American Commission for the Eradication of the Illicit Production, Traffic, Consumption and Use of Drugs and Psychotropic Substances and the United Nations Latin American Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (ILANUD), which led to the establishment of the Regional Centre for Legal Development and Cooperation in Central America (CEDEJU), on the control of drug production and trafficking;

That one of the main objectives of CEDEJU is to promote the harmonization of the laws of the Central American countries with the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances and the model law recommended by UNDCP; and

The importance of using, as a frame of reference, the Model Regulations Concerning Laundering Offences Connected to Illicit Drug Trafficking and Other Serious Offences;

Therefore:

Have decided to sign this Convention.

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article I. General Concepts

For the purposes of this Convention, the following definitions shall apply:

(1) Property: Assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, which are subject to ownership and economic valuation, as well as legal documents or instruments evidencing title to, or interest in, such assets.

(2) Convention: United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, signed in Vienna, Austria, on 20 December 1988, which entered into force on 11 November 1990.

(3) Confiscation: Permanent loss of property, instrumentalities and items derived from the commission of an offence, by decision of a competent judicial authority in accordance with article 1, letter (l), of the Convention.

(4) Freezing: Temporarily prohibiting the transfer, transformation, conversion, disposition, encumbrance or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority, to guarantee the payment of compensation or civil damages arising from the offence.

(5) Instrumentalities: Items used or designed or intended for use in any manner in the commission of illicit drug trafficking and related offences.

(6) Person: Any entity, natural or juridical, capable of acquiring rights and entering into obligations. For the purposes of this Convention, both shall incur responsibility and be subject to punishment.

(7) Proceeds: Any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of illicit drug trafficking and related offences.

(8) Illicit traffic: The offences set forth in article 3, paragraphs 1 and 2, of the Convention.

(9) Financial intermediation entities authorized under the domestic law of each State Party:

(a) Commercial banks and financial institutions, trust companies, insurance and reinsurance companies, savings and loan associations, building and loan associations, savings banks, industrial banks, credit unions and other savings, loan or debit institutions or establishments;

(b) Brokers or dealers in securities;

(c) Currency dealers or exchangers;

(d) Other similar entities.

Article 2. Laundering Offences and Offences Involving Assets Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offences

Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish the following as criminal offences under its domestic law:

(1) Converting or transferring resources or property, knowing that they are derived directly or indirectly from illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or from related offences, for the purpose of concealing or disguising their illicit origin or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence to evade the legal consequences of his or her actions;

(2) Helping to conceal or disguise the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of resources or property, knowing that they are derived directly or indirectly from illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or from related offences;

(3) Acquiring, possessing or using property, knowing that it was derived from illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or from related offences or participation in such an offence.

Penalties for each offence shall be established by each State Party in accordance with its domestic law and taking into consideration the penalties established by the other States Parties.

Likewise, more severe penalties shall be established for the commission of such offences by civil servants and public officials.

Article 3. Jurisdiction

The offences referred to in article 2 of this Convention shall be investigated, tried, judged and sentenced by a competent authority or court under the domestic law of each State, regardless of whether or not the illicit drug trafficking or related offences were committed in another territorial jurisdiction, without prejudice to extradition in accordance with the domestic law of each State Party.

CHAPTER II. PROPERTY, PROCEEDS AND INSTRUMENTALITIES

Article 4. Preventive Measures Relating to Property, Proceeds or Instrumentalities

In accordance with the domestic law of each State Party, the court or other competent authority shall order, at any time, preventive or provisional measures intended to preserve the availability of property, proceeds or instrumentalities derived from money laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences.

Article 5. Forfeiture of Property or Instrumentalities

When a person is convicted of a money laundering offence connected to illicit drug trafficking and related offences, the court shall order that the property, proceeds or instrumentalities connected to such an offence be forfeited and disposed of in accordance with the domestic law of each State Party.

Article 6. Bona Fide Third Parties

The measures and sanctions referred to in articles 4 and 5 shall apply without prejudice to the rights of bona fide third parties.

In accordance with the domestic law of each State Party, proper notification shall be made so that those claiming a legitimate interest in property, proceeds or instrumentalities may appear in support of their claims. The legal system of each State Party shall consider the most expeditious and effective means of notification, depending on whether or not the property is registrable.

In accordance with the domestic law of each State Party, the court or other competent authority shall return the property, proceeds or instrumentalities to the claimant, when it has been demonstrated to its satisfaction that:

(1) The claimant has a legitimate right to the property, proceeds or instrumentalities, and no participation, collusion or involvement with respect to laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences which are the object of the proceedings can be imputed to the claimant; and

(2) The claimant did all that could reasonably be expected to prevent the illegal use of the property, proceeds or instrumentalities.

Article 7. Disposition of Property, Proceeds or Instrumentalities Subject to Preventive Measures

Each State Party may, if its domestic law so allows:

(1) Authorize the authorities responsible for preventing, controlling, addressing and punishing the offences referred to in this Convention to make use of the property, proceeds or instrumentalities, while safeguarding the State's obligation to guarantee their due preservation.

The States Parties shall take appropriate measures to meet the costs of using and maintaining the items seized.

(2) Grant, when circumstances so warrant, the authorization referred to in the preceding paragraph to a bona fide third party or to the duly established owner of the property, proceeds or instrumentalities seized.

Article 8. Disposition of Forfeited Property, Proceeds or Instrumentalities

When property, proceeds or instrumentalities that are not required to be destroyed and that are not harmful to the public are forfeited under article 5 of this Convention, the competent authority may sell them, use them for official purposes or transfer them to the appropriate government agencies, according to the domestic law of each State Party.

Article 9. Property, Proceeds or Instrumentalities of Foreign Offences

The court or other competent authority may order, in accordance with the domestic law of each State Party, the seizure or other preventive measure in respect of property, proceeds or instrumentalities in its territorial jurisdiction when they are connected to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences committed against the laws of another country, and when such offences would have been offences if committed within its jurisdiction.

CHAPTER III. FINANCIAL INTERMEDIATION ENTITIES AND FINANCIAL ACTIVITIES

Article 10. Financial institutions and activities

Financial intermediation entities and entities engaged in financial activities shall be regulated by the competent authorities of the States Parties, as shall persons who carry out the following activities:

- (a) Systematic or substantial cashing of cheques;
- (b) Systematic or substantial operations involving the issuance, sale or redemption of travellers' cheques or money orders;
- (c) Systematic or substantial transmitting of funds by any means; and
- (d) Other activities involving financial intermediation, as well as the issuance, use or supervision of negotiable instruments or financial claims.

Article 11. Identification of Clients and Transmittal of Records

In States Parties with numbered or anonymous accounts or accounts operated through individual or corporate nominees, the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the preceding article shall be obligated to know the true identity of the holders of such accounts so that they may supply this information to regulatory authorities in investigations on the matters covered by this Convention.

Such entities shall record and verify, by reliable means, the identity, representative capacity, domicile, legal capacity, occupation or business purpose of persons, whether they be occasional or usual clients, through the use of identity documents, passports, birth certificates, driver's licences, partnership contracts and incorporation papers or any other official or private documents, when initiating business relations, especially when opening new accounts or passbooks, entering into fiduciary transactions, renting safe deposit boxes or performing cash transactions over an amount specified by the competent authority of each State Party.

Financial intermediation entities and entities engaged in the above-mentioned financial activities shall take reasonable measures to obtain and maintain information about the true identity of the person on whose behalf an account is opened or a transaction is conducted, if there are any doubts that a client is acting on his or her own behalf, particularly in the case of a juridical person which is not conducting any commercial, financial or industrial operations in the State where it has its headquarters or domicile.

During an operation and for at least five years after the conclusion of a transaction, the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the preceding article shall maintain records of the information and documentation required under this article. They shall also maintain records on customer identification, account files and business correspondence, as determined by the competent authority, for at least five years after the account has been closed.

Such entities shall also maintain records which may be used to reconstruct financial transactions in excess of an amount specified by the competent authority in each State Party for at least five years after the conclusion of the transaction.

Article 12. Availability of Records

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall comply promptly, and within the period of time to be established, with information requests from the competent authorities concerning the information and documentation referred to in the preceding article. These data shall be used in criminal, civil or administrative investigations, prosecutions or proceedings, as the case may be, regarding illicit drug trafficking and related offences or violations of the provisions of this Convention.

The competent authorities of one State may share information with the competent authorities of other States, in accordance with the domestic law of each State Party.

Article 13. Recording and Reporting of Cash Transactions

The financial institutions and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall record, on a form designed by the competent authority of each State Party, each cash transaction in domestic or foreign currency exceeding an amount specified by the said authority. The form shall include, at a minimum, the following data for each transaction:

- (a) The identity, signature and address of the person who physically conducts the transaction;
- (b) The identity and address of the person in whose name the transaction is conducted;
- (c) The identity and address of the beneficiary or the person on whose behalf the transaction is conducted, where applicable;
- (d) The identity of the accounts affected by the transaction, if any;
- (e) The type of transaction involved, such as deposit, withdrawal, currency exchange, cheque cashing, purchase of certified or cashier's cheques or money orders or other payments or transfers by or through such financial institution;
- (f) The identity of the financial institution where the transaction occurred; and
- (g) The date, time and amount of the transaction.

This record shall be drawn up accurately and completely by the financial institution on the day of the transaction, and shall be maintained for a period of five years from the date of the transaction.

Multiple cash transactions in domestic or foreign currency which, taken together, exceed a specified amount shall be treated as a single transaction if they are undertaken by or on behalf of any one person during any one day or any other period established by the competent authority. When a financial institution or its employees, officers or agents have knowledge of these transactions, they shall record them on the form determined by the competent authority of each State Party.

For transactions conducted on their own account between the financial intermediation entities defined in article 10, letter (a), that are subject to supervision by the domestic banking and financial authorities, recording on the form referred to in this article shall not be required.

The records shall be available to the court or other competent authority, in accordance with the domestic law of each State Party, for use in criminal, civil or administrative investigations, prosecutions or proceedings, as the case may be, in relation to money laundering offences connected to illicit drug trafficking and related offences or violations of this Convention.

When it deems advisable, the competent authority may establish that the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention file with it, within such time as it may establish, the form referred to in this article. This document shall serve as evidence or as an official report, and shall be used for the purposes mentioned in the preceding paragraph.

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the preceding paragraph shall not notify any person, other than a court, competent authority or other person authorized by the domestic legal provisions of each State Party, that such information has been requested by or furnished to a court or other competent authority of a State Party.

Article 14. Reporting of Suspicious Financial Transactions

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall pay special attention to transactions effected or attempted in any suspicious manner and to unusual patterns of transactions, and to insignificant but periodic transactions which have no apparent economic or lawful purpose.

Such entities shall promptly report to the competent authorities any suspicion that the transactions could constitute or be related to illicit activities.

Such entities shall not notify any person, other than a court, competent authority or other person authorized by the domestic legal provisions of each State Party, that such information has been requested by or furnished to a court or other competent authority of a State Party.

When the report referred to in the second paragraph of this article is effected in a lawful manner, the financial intermediation entities and their employees, staff, directors, owners or other representatives as authorized by law shall be exempted from criminal, civil and administrative liability, as the case may be, for complying with this article or for breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision, regardless of the result of the report.

Article 15. Liability of Financial Intermediation Entities and Entities Engaged in Financial Activities

The financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention, their employees, staff, directors, owners or other authorized representatives who, acting as such, participate in laundering offences, illicit drug trafficking and related offences shall be subject to sanctions more severe than those applicable to individuals not connected to such entities.

Such entities shall be liable, in accordance with the domestic law of each State Party, for the actions of their employees, staff, directors, owners or other authorized representatives who, acting as such, participate in the commission of any offence referred to in article 2 of this Convention.

Without prejudice to the criminal or civil liability which may be incurred by the persons referred to in the preceding paragraph in relation to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences, the entities referred to in the above-mentioned article 10 shall incur liability in accordance with the domestic law of each country for non-compliance with the obligations laid down in this Convention.

Article 16. Mandatory Compliance Programmes in Financial Intermediation Entities and Entities Engaged in Financial Activities

To protect themselves and to detect the offences referred to in article 2 of this Convention, the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention shall adopt, develop and implement internal programmes, policies, procedures and controls.

Such programmes shall include, at a minimum:

- (a) Procedures to ensure high standards of integrity of their employees and a system for evaluating the personal, employment and financial history of these employees;
- (b) Ongoing employee training and instruction on the responsibilities laid down in articles 10 to 13 of this Convention;
- (c) An independent audit mechanism to verify the implementation of programmes.

The above-mentioned financial intermediation entities and entities engaged in financial activities shall also designate compliance officers at management level in charge of the application of internal programmes and procedures, including the proper maintenance of records and reporting of suspicious transactions. These officers shall function as liaison with the competent authorities.

CHAPTER IV. PROVISIONS GOVERNING THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION

Article 17. Obligations of the Competent Authorities

In accordance with the domestic law of each State Party, the competent authorities, and especially those with regulatory and supervisory power over financial intermediation entities shall, among other obligations:

- (a) Grant, deny, suspend or cancel licences or permits to operate the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention;
- (b) Examine and supervise the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention, and regulate their effective compliance with the record-keeping and reporting obligations specified in this Convention;
- (c) Verify, through regular examinations, that the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the above-mentioned article 10 have and apply the mandatory compliance programmes referred to in article 15 of this Convention;
- (d) Provide other competent authorities with the information obtained from the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the above-mentioned article 10 in conformity with this Convention, including information resulting from an examination of any such entity;
- (e) Prescribe instructions or recommendations to assist the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in the above-mentioned article 10 in detecting suspicious patterns of behaviour in their clients. These guidelines shall be developed taking into account modern and secure techniques of money management and shall serve as an educational tool for the employees of such entities;
- (f) Cooperate with the competent authorities and provide them, to the extent possible, with technical assistance in investigations, prosecutions or proceedings relating to the offences referred to in article 2 of this Convention, other offences involving illicit drug trafficking and related offences.

The competent authorities, and especially those with regulatory and supervisory power over financial intermediation entities under the domestic law of each State Party, shall report promptly to other competent authorities any information received from financial intermediation entities concerning suspicious transactions or activities that could be related to the offences referred to in article 2 of this Convention, other offences involving illicit drug trafficking and related offences.

The competent authorities, and especially those with regulatory and supervisory power over financial intermediation entities under the domestic law of each State Party shall co-operate closely with the competent authorities of other States in investigations, proceedings or prosecutions relating to the offences referred to in article 2 of this Convention, other offences involving illicit drug trafficking and related offences and violations of the laws and administrative regulations applicable to financial intermediation entities.

Article 18. International Cooperation

The courts or other competent authorities of the States Parties shall cooperate with each other, taking appropriate measures to provide assistance in matters concerning laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences, in accordance with this Convention and within the limits of their respective legal systems.

The court or other competent authority of each State Party may submit or receive, through the diplomatic channel, a request to or from its counterpart in another State Party to identify, trace, seize or confiscate property, proceeds or instrumentalities connected to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences, and may take appropriate actions, including those provided for in articles 4 and 5 of this Convention.

A final judicial decision or judgement that provides for the forfeiture of property, proceeds or instrumentalities, issued by a competent court of another State Party in respect of the laundering of money derived from illicit drug trafficking and related offences may be recognized as evidence that such property, proceeds or instrumentalities may be subject to seizure, preventive measures or forfeiture, as appropriate, in accordance with the domestic law of each State Party.

The court or other competent authority may receive, through the diplomatic channel, a request from a court or other competent authority in another State Party to provide assistance in relation to a civil, criminal or administrative investigation, prosecution or proceeding, as the case may be, in relation to laundering offences involving money derived from illicit drug trafficking and related offences or violations of this Convention.

Such assistance may include providing originals or certified copies of relevant documents and records, including those of the financial intermediation entities and entities engaged in financial activities referred to in article 10 of this Convention, and government agencies; obtaining testimony in the requested State Party; facilitating the voluntary presence or availability in the requesting State Party of persons, including those in custody, to give testimony; locating or identifying persons; serving of documents; examining objects and places; carrying out searches and seizures; providing information and evidentiary items; and provisional measures.

Assistance provided under this article shall be undertaken in accordance with the domestic law of each State Party and the international instruments in force.

Article 19. Bank Secrecy or Confidentiality

The legal provisions referring to bank secrecy or confidentiality shall not be an impediment to compliance with this Convention when the information is requested by or shared with the court or other competent authority in accordance with the domestic law of each State Party.

CHAPTER V. FINAL PROVISIONS

Article 20

Any dispute concerning the application or interpretation of this Convention shall be settled by peaceful means, and, if necessary, shall be brought before the Central American Court of Justice.

Article 21

This Convention shall be adopted or ratified by each State Party in accordance with its respective constitutional procedures.

The General Secretariat of the Central American Integration System shall serve as depository of the instruments of ratification of and accession to this Convention.

This Convention shall remain in force indefinitely and shall enter into force, for the States having ratified it, once the third instrument of ratification has been deposited, and, for the remaining States, on the date of deposit of their respective instruments of ratification or accession.

Article 22

This Convention shall be open to accession by Belize, which may also negotiate an association or relationship agreement.

Article 23

This Convention may be amended, by agreement between the Parties, through amending protocols, which shall enter into force in the same manner as this Convention.

Article 24

Any State Party may denounce this Convention at any time by providing written notice thereof to the General Secretariat of the Central American Integration System. All States Parties shall be notified of the receipt of such a denunciation.

For the Party concerned, the denunciation shall take effect one year after the date on which the General Secretariat of the Central American Integration System receives the notice of denunciation.

Article 25

Reservations shall not be permitted in respect of this Convention.

Article 26

The original of this Convention shall be deposited with the General Secretariat of the Central American Integration System, which shall provide certified copies thereof to the signatory States.

Article 27

This Convention shall be registered with the United Nations Secretariat in accordance with the provisions of Article 102 of the Charter of the United Nations, and with the General Secretariat of the Organization of American States.

In witness whereof this Convention has been signed at Panama City on 11 July 1997.

For the Republic of Costa Rica:

FERNANDO E. NARANJO
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS AND WORSHIP

For the Republic of El Salvador:

RAMÓN E. GONZÁLEZ GINER
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

For the Republic of Guatemala:

EDUARDO STEIN BARILLAS
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

For the Republic of Honduras:

J. DELMER URBIZO
SECRETARY FOR FOREIGN AFFAIRS

For the Republic of Nicaragua:

EMILIO ALVAREZ MONTALVÁN
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

For the Republic of Panama:

RICARDO ALBERTO ARIAS ARIAS
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

[TRANSLATION — TRADUCTION]

CONVENTION CENTRAMÉRICAINE POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES CRIMES DE BLANCHIMENT D'ARGENT ET D'AVOIRS LIÉS AU TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET AUX CRIMES CONNEXES

Les Républiques du Costa Rica, d'El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Panama (ci-après dénommées les "Parties"),

Considérant:

Que les crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs liés au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes constituent un sérieux fléau social qu'il importe de prévenir et de réprimer;

Que le processus sur lequel reposent les crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs provenant d'activités criminelles entraîne toujours une érosion des structures sociales, politiques et économiques;

Que l'argent provenant desdites activités est une source de distorsions et de concurrence déloyale pour des économies légitimes des pays centraméricains;

Que le but ultime de ces activités criminelles est de consolider leurs produits grâce au recours à des mécanismes tendant à légitimer des capitaux;

Les dispositions de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne (Autriche) le 20 décembre 1988, en vigueur depuis le 11 novembre 1988, les dispositions du Règlement type relatif aux crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains (OEA) et la Loi type relative au blanchiment d'argent et à la confiscation du produit d'activités liées au trafic de stupéfiants élaborée par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) en novembre 1995;

Les principes et buts consacrés dans le Traité-cadre sur la sécurité démocratique en Amérique centrale signé le 15 décembre 1995;

Les fins auxquelles a été créée la Commission permanente centraméricaine pour l'élimination de la production, du trafic et de l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes et des crimes connexes en tant qu'organe spécialisé relevant du Système d'intégration centraméricaine;

La Déclaration finale du deuxième Forum des présidents des Parlements d'Amérique centrale, qui s'est tenu à Panama les 11 et 12 avril 1996 en vue de promouvoir l'adoption des instruments juridiques pertinents en la matière;

L'engagement pris par les gouvernements d'Amérique centrale, tel qu'il est reflété dans les déclarations conjointes publiées à l'issue des Réunions des chefs d'État et de gouvernement du Mexique et d'Amérique centrale tenues à Tuxtla Gutiérrez (Mexique) les 11 et 12 janvier 1991 et au Costa Rica les 15 et 16 février 1996;

Les initiatives conjointes en matière de contrôle de la production et du trafic de drogues du Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), de la Commission interaméricaine de lutte contre l'abus des drogues (CICAD) de l'Organisation des États américains, de la Commission permanente centraméricaine pour l'élimination de la production, du trafic et de l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes et des crimes connexes et de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine (ILANUD), qui ont débouché sur la création du Centre régional de développement et de coopération juridiques en Amérique centrale;

Que l'un des principaux objectifs du Centre régional de développement et de coopération juridiques en Amérique centrale est de promouvoir l'harmonisation des législations des pays d'Amérique centrale, d'une part, et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et la Loi type élaborée par le PNUCID, de l'autre; et

L'importance qu'il y a à prendre comme cadre de référence le Règlement type relatif aux crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de stupéfiants et aux crimes connexes;

Sont convenues de conclure la présente Convention.

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. Définitions

Aux fins de la présente Convention, l'on entend par:

1) "Biens" les actifs de tout type, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, pouvant faire l'objet d'une propriété et dotés d'une valeur économique ainsi que les documents et instruments juridiques faisant état de la propriété desdits avoirs et des autres droits y relatifs.

2) "Convention" la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne (Autriche) le 20 décembre 1988, qui est entrée en vigueur le 11 novembre 1990.

3) "Confiscation" la perte définitive de biens, d'instruments et d'effets provenant de la commission d'un délit résultant d'une décision de l'autorité judiciaire compétente, conformément au paragraphe 1 de l'article premier de la Convention.

4) "Embargo préventif" l'interdiction temporaire de transférer, transformer, convertir, aliéner, grever ou déplacer des biens ainsi que la garde ou le contrôle temporaire de biens en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal ou une autorité compétente afin de garantir l'indemnisation de la victime ou la réparation civile des torts causés par un acte criminel.

5) "Instrument" toute chose utilisée, destinée à être utilisée ou devant être utilisée de quelque manière que ce soit pour la commission de crimes liés au trafic illicite de drogues et de crimes connexes.

6) "Personne" toute personne physique ou morale ayant la capacité d'acquérir des droits et de contracter des obligations. Aux fins de la présente Convention, l'une et l'autre peuvent encourir une responsabilité et faire l'objet de sanctions.

7) "Produits" tout bien obtenu ou provenant directement ou indirectement de la commission d'un acte lié au trafic illicite de drogues et de crimes connexes.

8) "Trafic illicite" les crimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Convention.

9) "Organismes d'intermédiation financière autorisés par la législation interne de chaque Partie":

a) Les banques commerciales et établissements financiers, sociétés de fiducie, compagnies d'assurance et de réassurance, associations d'épargne et de crédit, associations de construction et de crédit, caisses d'épargne, banques industrielles, coopératives de crédit, autres institutions ou établissements d'épargne, de crédit ou de débit;

b) Les établissements de courtage ou d'intermédiation servant à la négociation de valeurs;

c) Les établissements d'intermédiation servant à la vente de devises ou maisons de change;

d) Les autres organismes de même nature.

Article 2. Crimes de blanchiment d'argent et d'avoirs liés au trafic illicite de drogues et crimes connexes

Chacune des Parties adopte les mesures nécessaires pour criminaliser au regard de son droit interne le fait:

1) De convertir ou de transférer des ressources ou des biens en sachant qu'ils proviennent directement ou indirectement du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes ou de crimes connexes afin de cacher ou de dissimuler leur origine illicite ou d'aider quiconque à participer à la commission d'un de ces crimes à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

2) De contribuer à cacher ou dissimuler la nature ou l'origine, l'emplacement, la destination, le mouvement ou la propriété réelle de ressources ou de biens ou de droits y relatifs en sachant qu'ils proviennent directement ou indirectement du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de crimes connexes;

3) D'acquérir, de posséder ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ou de crimes connexes ou de la participation à l'un de ces crimes.

Les sanctions dont est passible chaque crime sont déterminées par chaque État Partie conformément à sa législation nationale et compte tenu des sanctions établies par les autres États Parties.

La qualité de fonctionnaire ou d'agent public de l'auteur de tels crimes est une circonstance aggravante.

Article 3. Compétence

Sous réserve des dispositions relatives à l'extradition prévues par la législation nationale de chaque État Partie, l'autorité ou le tribunal compétent conformément au droit interne de chaque État Partie est habilité à connaître des crimes visés à l'article 2 de la présente Convention, sans égard à la question de savoir si le crime de trafic illicite de stupéfiants et les crimes connexes ont été commis sur le territoire d'un autre État.

TITRE II. BIENS, PRODUITS ET INSTRUMENTS

Article 4. Mesures conservatoires relatives aux biens, produits ou instruments

Conformément au droit interne de chaque État Partie, le tribunal ou l'autorité compétente peut à tout moment indiquer des mesures conservatoires visant à préserver les biens, produits ou instruments provenant des crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de drogues et aux crimes connexes.

Article 5. Confiscation de biens ou d'instruments

Le tribunal, dans tous les cas où il prononce une condamnation pour crime de blanchiment d'argent provenant du au trafic illicite de stupéfiants ou des crimes connexes, ordonne la confiscation des biens, produits ou instruments liés auxdits crimes, dont il est disposé conformément au droit interne de chaque État Partie.

Article 6. Tiers de bonne foi

Les mesures et sanctions visés aux articles 4 et 5 de la présente Convention s'appliquent sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Lesdites mesures et sanctions sont dûment notifiées conformément au droit interne de chaque État Partie pour que quiconque pouvant alléguer un intérêt légitime sur les biens, produits ou instruments sujets à confiscation puisse comparaître pour faire valoir ses droits. Les modalités de notification les plus rapides et les plus efficaces, selon qu'il s'agit de biens sujets ou non à enregistrement, sont déterminées par la législation nationale de chacun des États Parties.

Conformément au droit interne de chaque État Partie, le tribunal ou l'autorité compétente restitue au demandeur les biens, produits ou instruments dès lors qu'il est établi:

1) Que le demandeur a un droit légitime sur lesdits biens, produits ou instruments et qu'il ne peut être imputé au demandeur aucun type de participation, de collusion ou d'implication dans des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes faisant l'objet de la procédure; et

2) Que le demandeur a pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher que lesdits biens, produits ou instruments soient utilisés illégalement.

Article 7. Sort réservé aux biens, produits ou instruments faisant l'objet de mesures conservatoires

Dans la mesure autorisée par son droit interne, chaque État Partie peut:

1) Autoriser les autorités chargées de prévenir, de combattre et de réprimer les crimes visés par la présente Convention à utiliser les biens, produits ou instruments faisant l'objet de mesures conservatoires sous réserve de sauvegarder l'obligation qu'a l'État d'en garantir la préservation.

Les États Parties adoptent les mesures appropriées pour couvrir les dépenses afférentes à l'utilisation et à l'entretien des biens faisant l'objet d'un embargo préventif.

2) Lorsque les circonstances le justifient, accorder l'autorisation prévue à l'alinéa précédent à un tiers de bonne foi ou au propriétaire dûment accrédité du bien, produit ou instrument faisant l'objet d'un embargo préventif.

Article 8. Sort réservé aux biens, produits ou instruments confisqués

Les biens, produits ou instruments confisqués conformément à l'article 5 de la présente Convention qui ne doivent pas être détruits et qui ne sont pas néfastes pour la population peuvent, selon ce que décide l'autorité compétente, être aliénés, être destinés à un usage officiel ou être transférés aux organismes publics compétents, conformément au droit interne de chaque État Partie.

Article 9. Biens, produits ou instruments liés à des crimes commis à l'étranger

Conformément au droit interne de chaque État Partie, le tribunal ou l'autorité compétente peut ordonner un embargo ou prononcer toute mesure conservatoire concernant les biens, produits ou instruments situés dans son ressort liés à des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues et de crimes connexes commis en infraction à la législation d'un autre pays dans tous les cas où lesdits crimes, s'ils avaient été commis dans son ressort, auraient également été considérés comme tels.

TITRE III. ORGANISMES D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Article 10. Institutions et activités financières

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers sont soumis au contrôle des autorités compétentes des États Parties. Sont également soumises à ce contrôle les personnes réalisant les activités ci-après:

- a) Opérations régulières ou substantielles d'encaissement de chèques;
- b) Opérations régulières ou substantielles d'émission, de vente ou d'encaissement de chèques de voyage ou de virements postaux;
- c) Virements réguliers ou substantiels de fonds, par quelque moyen que ce soit; et
- d) Toutes autres activités supposant une intermédiation financière, ainsi que l'émission, l'administration ou la garde d'instruments ou d'effets de crédit.

Article 11. Identification des clients et tenue de registres

Dans les États Parties où il existe des comptes numérotés, des comptes anonymes ou d'autres comptes administrés sous mandat civil ou commercial, les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article précédent sont tenus de s'enquérir de l'identité véritable de leurs titulaires pour pouvoir la communiquer aux autorités de contrôle aux fins des enquêtes ouvertes sur les matières réglementées par la présente Convention.

Lesdites entités doivent également enregistrer et vérifier par des moyens dignes de foi l'identité, la qualité de mandataire, le domicile, la capacité juridique, la profession ou l'objet social de leurs clients, qu'ils soient occasionnels ou habituels, moyennant la production de documents d'identité, de passeports, d'actes de naissance, de permis de conduire, d'actes constitutifs ou de statuts ou de tous autres documents officiels ou privés lorsqu'ils établissent des rapports commerciaux, et en particulier lorsqu'ils ouvrent de nouveaux comptes, établissent des livrets d'épargne, réalisent des transactions fiduciaires, louent des coffres-forts ou effectuent des transactions en espèces d'un montant supérieur à celui déterminé par l'autorité compétente de chaque État Partie.

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers susmentionnés doivent adopter des mesures raisonnables pour obtenir et conserver les informations établissant l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles il est ouvert un compte ou effectué une transaction dans tous les cas où il y a lieu de douter que les intéressés n'agissent peut-être pas en leur propre nom, spécialement s'agissant de personnes morales qui ne réalisent pas d'opérations commerciales, financières ou industrielles sur le territoire de l'État où elles ont leur siège ou leur domicile.

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article précédent doivent conserver un registre des informations et documents mentionnés dans ledit article pendant toute la durée de l'opération et au moins cinq ans par la suite. Ils doivent en outre conserver les registres où est consignée l'identité de leurs clients, leurs relevés de comptes et la correspondance commerciale, selon les modalités déterminées par l'autorité compétente, au moins cinq ans après la clôture des comptes.

Lesdits organismes et établissements doivent en outre tenir les registres permettant de reconstituer les transactions financières dépassant le montant déterminé par l'autorité compétente de chaque État Partie au moins cinq ans après la fin desdites transactions.

Article 12. Consultation des registres

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention doivent donner suite sans tarder et dans le délai imparti aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités compétentes au sujet des informations et documents visés à l'article précédent. Ces renseignements sont utilisés aux fins des enquêtes et actions pénales, civiles et administratives, selon le cas, liées aux crimes de trafic illicite de drogues et aux crimes connexes ou à des violations des dispositions de la présente Convention.

Les autorités compétentes d'un État peuvent communiquer lesdites informations aux autorités compétentes d'autres États, conformément au droit interne de chaque État Partie.

Article 13. Enregistrement et déclaration de transactions en espèces

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention doivent enregistrer sur un formulaire établi par l'autorité compétente de chaque État Partie chaque transaction en espèces, en monnaie nationale ou en devises, dépassant le montant déterminé par ladite autorité. Les formulaires doivent, pour chaque transaction, contenir au moins les données ci-après:

- a) L'identité, la signature et l'adresse de la personne ayant physiquement réalisé la transaction;
- b) L'identité et l'adresse de la personne au nom de laquelle la transaction est réalisée;
- c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ou destinataire de la transaction, le cas échéant;
- d) L'identité des comptes affectés par la transaction, s'il y a lieu;
- e) Le type de transaction dont il s'agit, comme dépôt, retrait de fonds, change de devises, encaissement de chèques, achat de chèques certifiés ou de chèques bancaires, ordres de paiement ou autres virements effectués par l'établissement financier ou par son intermédiaire;
- f) L'identité de l'établissement financier où la transaction a été réalisée;
- g) La date, l'heure et le montant de la transaction.

Le formulaire susmentionné est établi par l'établissement financier, de façon précise et complète, le jour de la transaction et est conservé cinq ans à partir de cette date.

Les transactions multiples en espèces, aussi bien en monnaie nationale qu'en devises, qui dépassent ensemble le montant déterminé sont considérées comme une transaction unique si elles sont réalisées par une même personne ou pour son compte le même jour dans tout autre délai fixé par l'autorité compétente. L'établissement financier ainsi que ses employés, préposés et agents, dès lors qu'ils ont connaissance de telles transactions, doivent les enregistrer sur le formulaire établi par l'autorité compétente de chaque État Partie.

Le formulaire visé dans le présent article n'a pas à être établi dans le cas des transactions réalisées pour compte propre entre les organismes d'intermédiation financière mentionnés à l'alinéa a de l'article 10 qui sont supervisés par les autorités bancaires ou financières nationales.

Les registres doivent être tenus à la disposition du tribunal ou de l'autorité compétente, conformément au droit interne de chaque État Partie, pour que les informations qu'ils contiennent puissent être utilisées aux fins d'enquêtes et d'actions pénales, civiles ou administratives, selon le cas, concernant des crimes de blanchiment d'argent liés au trafic illicite de stupéfiants et à des crimes connexes ou toute violation des dispositions de la présente Convention.

L'autorité compétente peut, lorsqu'elle le juge opportun, exiger que les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention lui soumettent, dans les délais qu'elle détermine, le formulaire mentionné dans

le présent article. Ce document est utilisé comme élément de preuve ou rapport officiel aux fins mentionnées à l'alinéa précédent.

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'alinéa précédent ne doivent communiquer à quiconque, si ce n'est à un tribunal, à l'autorité compétente ou à une autre personne autorisée par les dispositions du droit interne de chaque État Partie, le fait que des informations ont été demandées par le tribunal ou l'autorité compétente dudit État ou leur ont été fournies.

Article 14. Déclaration de transactions financières suspectes

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention accordent une attention particulière aux transactions réalisées ou demandées de façon suspecte, aux transactions sortant de l'ordinaire et aux transactions peu importantes mais régulières et dépourvues de fondement économique ou juridique manifeste.

S'ils soupçonnent que les transactions en question peuvent constituer des activités illicites ou être liées à de telles activités les organismes susmentionnés doivent immédiatement le communiquer aux autorités compétentes.

Lesdits organismes ne doivent communiquer à quiconque, si ce n'est à un tribunal, à l'autorité compétente ou à une autre personne autorisée par les dispositions du droit interne de chaque État Partie, le fait que des informations ont été demandées par le tribunal ou l'autorité compétente dudit État ou leur ont été fournies.

Lorsque la communication visée au deuxième alinéa du présent article est effectuée régulièrement, les organismes d'intermédiation financière ainsi que leurs employés, préposés, administrateurs, propriétaires ou autres représentants autorisés par la législation en vigueur n'encourent aucune responsabilité pénale, civile ou administrative, selon le cas, pour avoir appliqué les dispositions dudit article ou révélé des informations devant être tenues confidentielles conformément à un contrat ou à toute autre disposition législative, réglementaire ou administrative, quel que soit le résultat de la communication.

Article 15. Responsabilité des organismes d'intermédiation financière et établissements financiers

Les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention ainsi que leurs employés, préposés, administrateurs, propriétaires ou autres représentants ou autorités qui, agissant en cette qualité, participent aux crimes de blanchiment d'argent ou de trafic illicite de drogues ou à des crimes connexes sont passibles de sanctions plus sévères que celles qui sont applicables aux personnes physiques étrangères auxdits organismes et établissements.

Lesdits organismes et établissements sont responsables, conformément au droit interne de chaque État Partie, des actes de leur personnel, préposés, administrateurs, propriétaires ou autres représentants autorisés qui, agissant en tant que tels, participent à la commission de l'un des crimes prévus à l'article 2 de la présente Convention.

Sans préjudice de la responsabilité pénale ou civile que peuvent encourir les personnes visées à l'alinéa précédent du chef de crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes, les organismes et établissements visés à l'article 10 sont responsables, conformément au droit interne de chaque pays, de l'inobservation des obligations stipulées dans la présente Convention.

Article 16. Programmes que doivent obligatoirement introduire les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers

Afin de se protéger et de détecter les infractions définies à l'article 2 de la présente Convention, les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention doivent adopter, élaborer et mettre en oeuvre des programmes, normes, procédures et contrôles internes.

Lesdits programmes devront comprendre au minimum:

- a) Des procédures de nature à garantir que le personnel répond à des normes élevées d'intégrité et un système d'évaluation des antécédents individuels, professionnels et patrimoniaux du personnel;
- b) Une formation permanente du personnel et la diffusion d'instructions concernant les responsabilités dont il est question aux articles 10 à 13 de la présente Convention;
- c) Un mécanisme d'audit indépendant afin de vérifier le respect des programmes établis.

En outre, les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers susmentionnés doivent désigner des cadres chargés de veiller au respect des programmes de procédures internes, notamment en tenant des registres appropriés et en déclarant les transactions suspectes. Lesdits cadres assurent la liaison avec les autorités compétentes.

TITRE IV. DISPOSITIONS RÉGISSANT L'APPLICATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION

Article 17. Obligations des autorités compétentes

Conformément au droit interne de chaque État Partie, les autorités compétentes, spécialement celles dotées de pouvoirs de réglementation et de supervision des organismes d'intermédiation financière, sont responsables, entre autres:

- a) De l'octroi, du refus, de la suspension ou de l'annulation des licences ou permis dont doivent être munis les organismes d'intermédiation financière et établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention;
- b) De la vérification ou du contrôle des organismes d'intermédiation financière et des établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention ainsi que de l'adoption des règles visant à assurer le respect intégral des obligations d'enregistrement et de déclaration prévues par ladite Convention;
- c) Du contrôle, au moyen de vérifications périodiques, de l'élaboration et de l'application par les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à

l'article 10 des programmes obligatoires mentionnés à l'article 15 de la présente Convention;

d) De la communication aux autorités compétentes des informations obtenues des organismes d'intermédiation financière et établissements financiers mentionnés à l'article 10, conformément à la présente Convention, y compris les informations provenant du contrôle d'un quelconque de ces organismes ou établissements;

e) De la promulgation d'instructions ou de recommandations visant à aider les organismes d'intermédiation financière et les établissements financiers visés à l'article 10 à détecter d'éventuels schémas de comportement suspects chez leurs clients, lesdites instructions ou recommandations devant tenir compte des techniques modernes et sûres de gestion des avoirs et devant être utilisées comme élément de formation du personnel desdits organismes et établissements;

f) De la coopération avec les autorités compétentes et de la fourniture à ces dernières de toute l'assistance technique possible lors des enquêtes et actions concernant les crimes définis à l'article 2 de la présente Convention ainsi que les autres crimes liés au trafic illicite de drogues et crimes connexes.

Les autorités compétentes, et spécialement celles qui sont dotées de pouvoirs de réglementation et de supervision des organismes d'intermédiation financière conformément au droit interne de chaque État Partie, doivent sans tarder porter à la connaissance des autres autorités compétentes toute information reçue d'organismes d'intermédiation financière au sujet de transactions ou d'activités suspectes pouvant être liées aux crimes définis à l'article 2 de la présente Convention ainsi qu'aux autres crimes de trafic illicite de drogues et crimes connexes.

Les autorités compétentes, et spécialement celles qui sont dotées de pouvoirs de réglementation et de supervision des organismes d'intermédiation financière conformément au droit interne de chaque État Partie, doivent coopérer étroitement avec les autorités compétentes des autres États aux fins des enquêtes, actions et procédures concernant les crimes définis à l'article 2 de la présente Convention, les autres crimes de trafic illicite de drogues et crimes connexes ainsi que les infractions aux lois ou règlements administratifs applicables à ces organismes.

Article 18. Coopération internationale

Les tribunaux ou les autorités compétentes des États Parties coopèrent conformément à la présente Convention et dans les limites de leurs législations respectives en adoptant les mesures appropriées pour s'entraider dans les domaines concernant les crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues et de crimes connexes.

Le tribunal ou l'autorité compétente d'un État Partie peut, par la voie diplomatique, présenter à son homologue d'un autre État Partie ou en recevoir une demande visant à identifier, localiser, saisir ou confisquer des biens, produits ou instruments liés aux crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes et peut adopter les mesures appropriées, y compris celles visées aux articles 4 et 5 de la présente Convention.

Toute décision judiciaire ou sentence définitive ordonnant la confiscation de biens, produits ou instruments prononcée par un tribunal compétent d'un autre État Partie dans une affaire de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes est recevable comme preuve du fait que lesdits biens, produits ou instruments peuvent faire l'objet d'un embargo, de mesures conservatoires ou de confiscation, selon le cas, conformément au droit interne de chaque État Partie.

Le tribunal ou l'autorité compétente peut recevoir par la voie diplomatique une demande émanant d'un tribunal ou d'une autorité compétente d'un autre État Partie en vue d'obtenir une assistance concernant une enquête ou action de caractère civil, pénal ou administratif, selon le cas, concernant des crimes de blanchiment d'argent provenant du trafic illicite de drogues ou de crimes connexes ou des violations des dispositions de la présente Convention.

Cette assistance peut notamment revêtir la forme de la communication d'originaux ou de copies certifiées conformes des documents et registres pertinents, y compris ceux des organismes d'intermédiation financière et établissements financiers visés à l'article 10 de la présente Convention ainsi que d'organismes gouvernementaux, l'obtention de témoignages sur le territoire de l'État Partie requis, la facilitation de la présence ou de la comparution volontaire sur le territoire de l'État Partie requérant de personnes appelées à prêter témoignage, y compris de détenus, la localisation ou l'identification de personnes, la signification d'actes judiciaires, l'examen d'objets ou de lieux, la réalisation d'inspections et de perquisitions, la communication d'information d'éléments de preuve et l'indication de mesures conservatoires.

L'assistance visée par le présent article est fournie conformément au droit interne de chaque État Partie et aux instruments internationaux en vigueur.

Article 19. Secret bancaire

Les dispositions légales concernant le secret bancaire ne font pas obstacle à l'application de la présente Convention lorsque l'information est demandée ou communiquée par un tribunal ou une autorité compétente conformément au droit interne de chaque État Partie.

TITRE V. DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention sera soumis à des moyens de règlement pacifique des différends et, s'il y a lieu, sera porté devant la Cour centraméricaine de Justice.

Article 21

La présente Convention sera approuvée ou ratifiée par chaque État Partie conformément à ses procédures constitutionnelles respectives.

Les instruments de ratification et d'adhésion à la présente Convention seront déposés auprès du Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine.

La présente Convention, conclue pour une durée indéfinie, entrera en vigueur, à l'égard des États qui l'auront ratifiée, lors du dépôt du troisième instrument de ratification et, à l'égard des autres États, à la date de dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion respectifs.

Article 22

La présente Convention reste ouverte à l'adhésion du Belize, lequel pourra également négocier un accord d'association.

Article 23

La présente Convention peut être modifiée d'un commun accord entre les Parties, en vertu de protocoles d'amendement, lesquels entreront en vigueur selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues pour l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 24

Un État Partie peut à tout moment dénoncer la présente Convention moyennant notification écrite adressée au Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine, lequel communique la notification de dénonciation à tous les États Parties.

La dénonciation produit effet, à l'égard de la Partie intéressée, un an suivant la date à laquelle le Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine a reçu sa notification.

Article 25

La présente Convention n'admet pas de réserve.

Article 26

L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétariat général du Système d'intégration centraméricaine, lequel en communiquera des copies certifiées aux États signataires.

Article 27

La présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte de ladite Organisation ainsi qu'auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.

En foi de quoi la présente Convention a été signée à Panama le 11 juillet 1997.

Pour la République du Costa Rica:

FERNANDO E. NARANJO

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DU CULTE

Pour la République d'El Salvador:

RAMON E. GONZÁLEZ GINER

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Pour la République du Guatemala:

EDUARDO STEIN BARILLAS

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Pour la République du Honduras:

J. DELMER URBIZO

SECRÉTAIRE AUX RELATIONS EXTÉRIEURES

Pour la République du Nicaragua:

EMILIO ALVAREZ MONTALVÁN

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Pour la République du Panama:

RICARDO ALBERTO ARIAS ARIAS

MINISTRE DES RELATIONS EXTÉRIEURES